# La cuestión de la desigualdad

Toda sociedad democrática decide, en cierta medida, con qué nivel de desigualdad quiere vivir. Para ello, utiliza políticas que favorecen una mayor igualdad de oportunidades y que ayudan a conseguir unas condiciones de vida mínimamente aceptables para todos los ciudadanos. Educación, sanidad, pensiones, impuestos progresivos, subsidios al desempleo o la fijación de un salario mínimo son ejemplos de instrumentos que influyen decisivamente en la distribución de los ingresos y del bienestar social. Tras tres décadas en las que la desigualdad ha tendido a aumentar en la mayoría de economías avanzadas, y con el riesgo que ello supone de fractura social y caldo de cultivo para los populismos, el debate sobre cómo atajarla ha ido ganando fuerza y centralidad.

Si bien es cierto que el grueso del deterioro se concentró en los años ochenta y noventa y que este ha resultado más marcado en determinados países como EE. UU., la tendencia general en los países desarrollados ha sido hacia una mayor desigualdad. Una tendencia que refleja un mayor ritmo de crecimiento de las rentas (después de impuestos y transferencias) situadas en las decilas superiores de la distribución de ingresos en relación con las decilas medias y, especialmente, con las decilas más bajas. Esa creciente dispersión de las rentas deriva, a su vez, principalmente, de la evolución dispar de los ingresos salariales: los salarios de los trabajadores mejor pagados han crecido más rápido que los de los trabajadores con los salarios más bajos.

Aunque sus causas son múltiples, destacan dos de ellas: los cambios tecnológicos y la globalización económica. Por un lado, los cambios tecnológicos, asociados por ejemplo a la revolución digital, han favorecido a los trabajadores mejor preparados y a sus remuneraciones, que ya eran, de entrada, de las más altas. Durante muchos años, la demanda de trabajo cualificado ha crecido a un ritmo más elevado que la disponibilidad de este tipo de trabajadores (lo que se ha descrito como una «carrera entre tecnología y educación»), impulsando la denominada prima por educación. Por otra parte, la globalización económica ha incidido en la distribución de las rentas de las economías avanzadas a través de una reducción de la demanda de trabajadores menos cualificados, que competían de forma directa (vía deslocalizaciones) o indirecta (vía importaciones) con los trabajadores de economías emergentes. Al mismo tiempo, la globalización económica ha presionado al alza las remuneraciones de los trabajadores más cualificados, ya que su productividad ha crecido al competir en un mercado mucho más grande (sirva de ejemplo los ingresos que producen las grandes estrellas del fútbol para sus equipos).

Otros factores que han podido impactar en la evolución de la desigualdad, aunque la evidencia en este sentido es menos concluyente, incluyen la disminución de los salarios mínimos y la liberalización de ciertos sectores que, protegidos de la competencia, generaban rentas monopolísticas y podían permitirse pagar salarios más elevados. Por otra parte, el esfuerzo redistributivo de las políticas públicas no ha tendido a disminuir en los últimos 30 años y, por lo tanto, no parece ser responsable de un aumento de la desigualdad.

Las políticas destinadas a frenar el aumento de la desigualdad deben tener en cuenta los motivos que subyacen tras esta tendencia. En este sentido, a la vista de la relevancia de los cambios tecnológicos y de la globalización, cobran una importancia capital las políticas educativas y las del mercado de trabajo, como el fomento de la formación continua y los programas para suplementar los sueldos más bajos o apoyar a los trabajadores más perjudicados por la globalización. Todo esto no necesariamente implica gastar más. En muchos casos puede ser suficiente con gastar mejor.

Tampoco podemos obviar la importancia de aquellas políticas públicas que fomentan el crecimiento económico y que generan riqueza y empleo. Políticas que determinan, en definitiva, el tamaño del pastel. La aspiración no es ser todos pobres por igual o redistribuir pobreza sino conseguir una mayor igualdad, en la medida de lo posible, al alza.

**Enric Fernández**
Economista jefe
31 de diciembre de 2016